

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

ASUNTO	PRUEBA EXTRAPROCESAL
DEMANDANTE	HERNANDO DE JESÚS OQUENDO HINCAPIÉ
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN AUTO–
PROCEDENCIA	JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 022 2022 00337 01
	INTERNO 2022-215
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 029
DECISIÓN	DECLARA INADMISIBLE RECURSO DE APELACIÓN
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Medellín, tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Procedente del Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Medellín, fue remitido a esta Corporación el expediente contentivo del trámite de prueba extraprocesal promovido por el señor Hernando de Jesús Oquendo Hincapié, a efectos de surtir el recurso de apelación, que en el efecto devolutivo fue concedido frente al auto de fecha 28 de septiembre de 2022, mediante el cual se rechazó de plano la solicitud de prueba extraprocesal (Archivo digital 04/Carpeta 01.Primer Instancia).

Sometido el asunto al examen preliminar que manda el artículo 325 del Código General del Proceso, se advierte configurada la falta de algunos requisitos para la concesión del recurso; circunstancia ésta que deriva en la declaratoria de inadmisibilidad de la alzada.

CONSIDERACIONES

Bien claro se tiene que en lo atinente a la procedencia del recurso de apelación opera el principio de taxatividad, conforme al cual, sólo son susceptibles de la

impugnación vertical aquellas decisiones que en estricta legalidad se les haya conferido tal posibilidad.

La práctica judicial ha enseñado que para establecer si determinada providencia es susceptible de apelación, se debe, en primer término, examinar el listado de autos apelables, consagrado el artículo 321 del Código General del Proceso, y si de este no se advierte la procedencia del mismo, deberá entonces darse aplicación a la preceptiva del numeral 10° de dicha norma, a cuyo tenor, son susceptibles de tal recurso las demás providencias expresamente señaladas en dicho Código.

Así pues, el artículo 321 aludido, determina de manera general la procedencia del recurso de apelación contra los autos proferidos en primera instancia, así:

Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.
2. El que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros.
3. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.
5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva.
6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.
7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.
9. El que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano.
10. Los demás expresamente señalados en este código.

La lectura de la norma citada permite inferir la ausencia de canon que contemple como apelables las decisiones proferidas en el trámite especial de las pruebas extraproceso o anticipadas, sin que sea posible aplicar el numeral 3° del referido canon el cual establece que es apelable el *auto “...que niegue el decreto o la práctica de pruebas”*, porque el citado artículo 321 del C.G.P. en su parte introductoria establece expresamente que *son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia* (Negrillas fuera del texto); lo que significa, que la apelación sólo opera para providencias proferidas al interior de

procesos que se adelantan en primera instancia y, el trámite de pruebas extraprocesales, como su nombre mismo lo dice, no está contenido en aquellos procesos de los que conocen tanto el juez civil municipal, como el juez civil del circuito a prevención, **en primera instancia**, sino como un trámite especial por fuera del proceso, es que eso es, un trámite especial que tiene unos requisitos especiales de procedencia, distintos a los que se exigen para el decreto y la práctica de pruebas al interior del proceso.

Ahora, la técnica judicial enseña que, para establecer si determinada providencia es susceptible del recurso de apelación, deberá examinarse en primer lugar, el listado taxativo consignado en el estudiado artículo 321 y si de éste no se advierte la procedencia del mismo, se tendrá que dar aplicación a la preceptiva del numeral 10 *ejusdem* que reza: “*Los demás expresamente señalados en éste Código*”.

De suerte que como en las normas especiales que regulan las pruebas extraprocesales tampoco aparece como apelable la providencia que niega la solicitud de prueba extraprocesal y como tampoco se infiere su procedencia de otras normas del Código General del Proceso, habrá de predicarse, con certeza, que la decisión atacada no es apelable.

Sobre este tópico se ha pronunciado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, avalando la interpretación relativa a la inapelabilidad de las decisiones adoptadas en los trámites de pruebas extraprocesales y, en sentencia del 10 de agosto de 2016 M.P. Luis Alonso Rico Puerta, reiterando lo expuesto en anterior oportunidad por la misma Corporación en sentencia de tutela del 6 de octubre de 2009, expuso:

2. En el asunto en estudio, se censuran en primer lugar, las decisiones del Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva que condujeron a la aplicación de la confesión ficta y la negativa de excusar la inasistencia de Cristóbal Rodríguez García al interrogatorio de parte anticipado, particularmente el auto de fecha 30 de septiembre de 2015 que mantuvo en firme el proveído de fecha 18 de agosto de esa misma anualidad que ordenó el archivo de la solicitud extra-proceso (fl. 143, cd. 1).

Luego, es objeto de cuestionamiento el proceder del anterior estrado judicial, al negar la concesión de la apelación contra la providencia antes

referida, así como la confirmación de dicho criterio por parte del superior funcional, Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, cuando en sede del recurso de queja, estimó bien denegada la impugnación vertical (fl. 302 a 308, cd. 1-A).

De igual manera, particular crítica mereció la determinación del Juzgado Municipal consistente en negar la alegación de nulidad que con posterioridad a la interposición de los mecanismos de impugnación antes referidos (25 de agosto de 2015), presentó el aquí reclamante (fls. 286 y 287, ibídem).

En esta clase de escenarios la Corte ha sentado precedente que reclama por un escrutinio constitucional del Juez orientado a la providencia que tenga carácter definitivo. En reciente pronunciamiento, la Sala reiteró su línea de pensamiento y le dio concreta aplicación así:

«En consecuencia, se adecuará la orden de protección para que esté acorde con el principio de conservación de los actos procesales y la residualidad de la acción de tutela, conforme a los cuales es suficiente para el restablecimiento de la vulneración al derecho fundamental al debido proceso la eliminación del ordenamiento jurídico de la providencia definitiva.

Un proceder en contrario, (...), ofende la técnica de la protección constitucional y la naturaleza de éste mecanismo de amparo; pues no se trata de aniquilar las decisiones cuestionables, sino de habilitar que los mecanismos del procedimiento, en caso de estar disponibles en el caso concreto, operen y conjuren por sí mismos las deficiencias que edificaron la vía de hecho.» (CSJ SC STC7911-2016, 16 jun. 2016, 2016-00215-01, reiterada STC9223-2016, 7 jul. 2016, rad. 2016-00345-01).

3. Siguiendo la secuencia establecida y visto que ningún reparo cabe formular a la solicitud de amparo desde la óptica de la subsidiariedad y la inmediatez, en los particulares aspectos relacionados con la decisión de archivo de las diligencias y el rechazo de la apelación, será del caso anticipar que ninguna de dichas actuaciones merece la intervención del Juez de tutela en defensa del derecho fundamental al debido proceso.

3.1. La postura del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, al estimar bien denegada la apelación formulada contra el auto proferido el 30 de septiembre de 2015, mediante el cual se ordenó el archivo de la diligencia extra-proceso, más allá que pueda o no compartirse, luce como razonable conforme a la interpretación de las disposiciones procesales comprometidas, en especial el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil.

Se precisa que la Corte en supuestos similares y bajo el mismo estatuto procesal civil, ha estimado razonable la repulsa de la alzada en actuaciones extraprocesales, con fundamento en criterios aún más generales y contundentes sobre la limitación de la doble instancia, así:

«Ahora, en cuanto a las decisiones adoptadas por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal, no se advierte que éstas constituyan vía de hecho, por emerger como el deducción de la interpretación ponderada y razonada

efectuado al resolver el asunto dentro del ámbito de su competencia, evento sobre el cual no le es dable al juez constitucional inmiscuirse, sólo porque el accionante no la comparte o tiene una percepción diversa a la concretada en dicho pronunciamiento.

En este sentido, el referido despacho judicial apreció que las providencias recurridas, al haberse proferido dentro del trámite de pruebas anticipadas, no eran susceptibles del recurso de apelación por no estar tales decisiones enlistadas en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil ni en las normas especiales que disciplinan ese trámite, reflexiones compatibles con el ordenamiento procesal y el principio de taxatividad o especificidad que rige tal medio impugnativo.» (CSJ SC 6 oct. 2009, rad. 2009-00055-01).

3.2. Superado el anterior análisis queda habilitado el estudio de la actuación del Juzgado Décimo Civil Municipal de Neiva, en cuanto concierne a la forma en que resolvió el recurso de reposición frente a la resolución de archivo de las diligencias de prueba anticipada.

La anterior jurisprudencia resulta plenamente aplicable al presente caso, porque aunque refiere al Código de Procedimiento Civil, lo cierto es, que la cláusula general consagrada en el pluricitado artículo 321, sobre la procedencia de la alzada sólo para autos proferidos en primera instancia y que antes estaba contenida en el artículo 351 del C.P.C., no sufrió variación en el Código General del Proceso, como tampoco las normas especiales que regulan el trámite de las pruebas extraprocesales en lo referente a la no consagración de la alzada para las providencias proferidas al interior de éste tipo de diligencias.

Si bien es cierto, el hecho de que en la actualidad en el C.G.P. las pruebas extra procesales estén contenidas, para efectos de designación de juez competente, en los artículos que establecen los asuntos que los jueces civiles municipales y los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia (Artículos 18 y 20), lo que ha llevado a que algunos administradores de justicia sostengan que ello implica que dicho trámite especial es susceptible de ser conocido en segunda instancia y por ende, procede la apelación frente a las decisiones allí adoptadas, este Despacho, como se anteló, asume la posición según la cual no hay apelación en el trámite de pruebas extraprocesales, porque la prueba extraprocesal como su nombre lo dice, es un trámite especialísimo extra proceso y no puede convertirse en un proceso con instancias; porque la alzada se formula por la parte a la cual le es desfavorable

la decisión y, en las pruebas extraprocesales no hay partes en estricto sentido; porque la apelación es taxativa y por ende, no puede ser concedida con criterios extensivos, sino restrictivos, de cara a los supuestos que de forma expresa establece el estatuto procesal civil y finalmente, porque tampoco se puede afirmar con certeza que el querer del legislador al enunciar estas diligencias como aquellas de las que conocen en primera instancia los jueces civiles municipales y los del circuito (Artículos 18#7 y 20 #10) haya sido el de consagrar la posibilidad de apelación para las decisiones adoptadas dentro de diligencias de prueba extraprocesal, porque de no ser así lo hubiera enlistado en los asuntos de que conocen en única instancia, porque en la normativa anterior, esto es en el Código de Procedimiento Civil, tampoco se enuncian dentro de los asuntos de que conocían los jueces civiles municipales en primera instancia, sino que a los trámites de prueba extraprocesal se aludía en el artículo 18 de la derogada normativa como aquellos de competencia privativa de los jueces municipales, siendo el cambio con el nuevo código el C.G.P. que de tales solicitudes conocen ambos, civiles municipales y del circuito a prevención.

Deviene de lo anterior que, si la apelación, como aconteció en este caso, se concedió sin ser dicho auto apelable, debe en esta instancia procederse en los términos del artículo 325 del Código General del Proceso, declarando inadmisibile el recurso y ordenando la devolución de las diligencias al Juzgado de origen, como en efecto se hará.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor Hernando de Jesús Oquendo Hincapié y que fuera concedido por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Medellín, frente al auto proferido el día 28 de septiembre de 2022, mediante el cual se rechazó de plano la solicitud de prueba extraprocesal formulada por el recurrente.

SEGUNDO. ORDENAR la devolución del expediente digital al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **72149e5388173c98777ee11457fc4ff658d653ab0e4102a5dd71975c3e85a225**

Documento generado en 03/03/2023 03:13:07 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>